



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 16/12/2020

Radicado	08-001-33-33-014-2020-00195-00
Medio de control o Acción	Ejecutivo
Demandante	María del Socorro Cuavas Barraza
Demandado	Municipio de Soledad
Juez	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor Juez, paso a su despacho el expediente de la referencia asignado a este juzgado previa formalidad de reparto.

PASA AL DESPACHO
A fin que se pronuncie acerca de librar o no el mandamiento de pago solicitado.

CONSTANCIA
Expediente Digital 70 folios

ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicado	08-001-33-33-014-2020-00195-00
Medio de control o Acción	Ejecutivo
Demandante	María del Socorro Cuavas Barraza
Demandado	Municipio de Soledad
Juez	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES

La señora María del Socorro Cuavas Barraza, actuando a través de apoderado especial, presenta demanda ejecutiva a través del correo electrónico enviado a la oficina de servicios de los juzgados administrativos el 3 de noviembre de 2020, en contra del Municipio de Soledad, a fin que el Despacho libre mandamiento de pago a su favor por la suma de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/L (\$136.914.318.36)**; la cual se deriva de la sanción moratoria que ha sido estipulada en CIENTO VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/L (\$126.184.987.47)) por concepto de liquidación del reajuste salarial en los porcentajes del 8%, 16% y 15% para los años 2013, 2014 y 2015; más la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L (\$1.820.210.94) por concepto de liquidación de las prestaciones sociales como prima de navidad, prima de servicio e intereses de las cesantías y vacaciones, para lo cual se toma como base el ultimo incremento que para este caso es el año 2015, la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$231.579).

Entendiéndose el proceso ejecutivo como el medio o instrumento judicial para obtener el cumplimiento forzoso de obligaciones de dar, hacer y no hacer, a favor de un acreedor y en contra de un deudor que no han sido cumplidas, basadas en un título ejecutivo simple o complejo, que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible ante la justicia.

La doctrina define el proceso ejecutivo como seguidamente se cita a continuación:

"El proceso ejecutivo no tiene por objeto como el de conocimiento, declarar un derecho dudoso, sino hacer efectivo el que ya existe, reconocido en una prueba preconstituida. Carnelutti dice que los procesos ejecutivos tienen como fin "satisfacer una pretensión" y Chiovenda advierte que su finalidad es "lograr la actuación práctica de la ley".¹

Sobre el particular, el H. Consejo de Estado, en reiterados pronunciamientos, entiende el proceso ejecutivo como a continuación se cita textualmente:

"El proceso ejecutivo tiene su fundamento en la efectividad del derecho subjetivo del ejecutante que consiste en la facultad de reclamar el cumplimiento

¹ MONROY CABRA, Marco Gerardo Procesos Ejecutivos, declarativos y cautelares Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal N° 2. Pág. 50, 1984.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

de una obligación clara, expresa y exigible contenida en el título ejecutivo y cuyo titular es el ejecutante acreedor; tiene por finalidad asegurarle a éste la satisfacción de su acreencia mediante la utilización de medios coercitivos legítimos y legales (art. 488 C. P. C.). A ello se debe que la obligación por cuyo cumplimiento se reclama o se pretender ejecutar ante el poder jurisdiccional del Estado debe tener esas tres características – obligación clara, expresa y exigible - las cuales se deben revelar o contener o en el documento si el título es simple o en el conjunto de documentos si el título es complejo.²

Descendiendo a estudiar la demanda ejecutiva formulada por la señora María del Socorro Cuavas Barraza, actuando a través de apoderado especial, pretende que el despacho libre mandamiento de pago a su favor por valor de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/L (\$136.914.318.36)**, por concepto de incrementos salariales correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015.

En el asunto propuesto por la presente demanda, y de acuerdo con los documentos que se aportan con el libelo, se observa que el Municipio de Soledad reconoció mediante Decreto 357 del 15 de septiembre de 2017, aplicar los incrementos salariales correspondientes a las vigencias 2013, 2014, y 2015 a los auxiliares administrativos adscritos a la Secretaría de Educación Municipal³; que la accionante fue nombrada mediante decreto 0001602 de diciembre de 1996 en el cargo de secretaria grado 02 en el Instituto Técnico Industrial del Atlántico del Municipio de Soledad⁴.

Así mismo, se avista que el 02 de octubre de 2019 la hoy ejecutante radicó petición ante el Alcalde del Municipio de Soledad⁵, con el propósito de que se le cancelara los incrementos salariales correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015 y la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, frente a lo cual la Administración, mediante oficio DOJ 4608 /2019⁶, manifestó que respecto al pago de nivelación pendiente se está adelantando las gestiones para definir las fuentes de financiamiento y el mecanismo de pago de las obligaciones pendientes de cancelar por concepto de incremento salariales a favor de los funcionarios de planta administrativa de la secretaria de educación.

De lo anterior se infiere que el acto administrativo que arrima como título ejecutivo, esto es, el Decreto 357 del 15 de septiembre de 2017⁷, le fue solicitado su cumplimiento y hasta el momento no se ha suscitado discusión o controversia respecto de la obligación que existe, en tanto, la administración la reconoce y se denota con la respuesta a la solicitud elevada por la parte ejecutante.

En primera instancia, es menester determinar si le asiste a este juzgado conocer el presente proceso, para lo cual se hace necesario remitirse al artículo 104 de la ley 1437 de 2011 que señala:

ARTÍCULO 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de

² H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de fecha 2 de octubre de 2003, C.P.: Dra. María Elena Giraldo Gómez.

³ Ver folios 52-54 del expediente digital

⁴ Ver folio 22 del expediente digital

⁵ Ver folios 23 y 24 del expediente digital

⁶ Ver folio 25 y 26 del expediente digital

⁷

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades”.

De lo anterior se desprende que la jurisdicción contenciosa administrativa conoce de los procesos ejecutivos derivados de sentencias, de las conciliaciones aprobadas y los originados en los contratos celebrados por las entidades públicas.

En el presente caso, el ejecutante aduce que el título ejecutivo emana del acto administrativo Decreto 357 del 15 de septiembre de 2017, por medio del cual se ordena aplicar los incrementos salariales correspondientes a las vigencias 2013, 2014 y 2015 a los auxiliares administrativos adscritos a la Secretaría de Educación Municipal de Soledad, como fundamento jurídico para que le sea tenido en cuenta como título ejecutivo el acto administrativo aportado, el ejecutante cita el artículo 297 del C.P.A.C.A. el cual indica que para los efectos de este Código constituyen título ejecutivo:

“4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. (...)”

Para este Despacho es claro que el listado incluido en el mencionado artículo 297 del C.P.A.C.A sólo define qué se entiende por título ejecutivo para los efectos de la Ley 1437 de 2011, más no tiene la virtud de atribuir competencia para su conocimiento a la jurisdicción contenciosa administrativa.

A juicio de esta Agencia Judicial, por el criterio de especialidad, es el numeral 6º del artículo 104 del C.P.C.A anotado previamente, la norma encargada de asignar conocimiento a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en ese sentido, no le está otorgando atribución para ejecutar obligaciones que consten en actos administrativos de las entidades estatales o de particulares que cumplan funciones administrativas.

En este orden de ideas, no es viable que este Despacho conozca del proceso ejecutivo basado en un acto administrativo donde conste una obligación insatisfecha a cargo de una entidad pública. Los actos administrativos a los que se refiere el artículo 297 de CPACA no son otros que los dictados con ocasión de la actividad contractual, pues por originarse en los contratos celebrados por entidades públicas, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, si debe conocer de la ejecución de las obligaciones que consten en actos administrativos de carácter contractual, en razón a que el mismo artículo 104 del CPACA en la parte final del numeral 6º le otorga competencia a esta jurisdicción cuando los ejecutivos son originados en los contratos celebrados por esas entidades, y además define taxativamente los asuntos de conocimiento de la misma, sin que se encuentre dentro de ellos los ejecutivos laborales derivados de un acto administrativo.

A su turno, el artículo 2 numeral 5 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, asigna a la Jurisdicción Ordinaria

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Laboral la competencia de la ejecución o los Procesos Ejecutivos por obligaciones derivadas de una relación de trabajo, y el cual establece:

"ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL. La Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:

(...)

5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad.

(...)

Además, al haberse atribuido de manera expresa el artículo 2 de la ley 712 de 2001, la competencia de las ejecuciones por obligaciones derivadas de una relación laboral o de trabajo, a la Justicia Laboral Ordinaria, se entiende estos asuntos excluidos de esta jurisdicción, razón por la cual, al originarse el acto administrativo que se pretenda ejecutar de una relación laboral, carece este Despacho de jurisdicción para conocer de la presente acción ejecutiva.

El H. Consejo de Estado⁸, se ha pronunciado en torno a la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para conocer de los procesos ejecutivos derivados de los actos administrativos que reconocen derechos laborales, señalando al respecto:

"El pleno de esta corporación, advirtió que, en estos eventos, el interesado debía, provocar' un pronunciamiento de la administración para obtener el acto administrativo que le sirviera de título ejecutivo ante la jurisdicción laboral, no ante los jueces administrativos, porque el artículo 1.34 8-7, adicionado por la Ley 446 de 1998, artículo 42, sólo les otorgó competencia a estos para conocer de los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por esta jurisdicción, mientras que el artículo 2 del Código Procesal .del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 2 de la ley 712 de 2001, le adjudicó competencia general a la jurisdicción laboral ordinaria para la "ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema, de seguridad social integra que no correspondan a otra autoridad."

En lo concerniente a la competencia del caso bajo examen, comoquiera que el asunto es relativo a la ejecución por obligaciones derivadas de una relación laboral, y es contra un municipio, la competencia de conformidad con el artículo 7 de la Ley 712 de 2001, corresponde a los Jueces Laborales del Circuito.

Así las cosas, este despacho declarará la falta de competencia por jurisdicción y en consecuencia remitirá el expediente a la Jurisdicción Ordinaria especialidad laboral, para que sea repartido a los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Barranquilla.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla.

RESUELVE:

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección "B", Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio Bogotá, 4 de mayo de 2011, radicación No. 19001-23-31-000-1998- 02300-01 (19957) Actor: Medardo Torres Becerra, Demandados: Departamento del Cauca — Caja de Previsión Social Caprecauca. En Similar sentido, Auto del 27 de marzo de 2007, Expediente 76001-23-31-0000-2000- 02513-01, C.P. Jesús María Lemus Bustamante

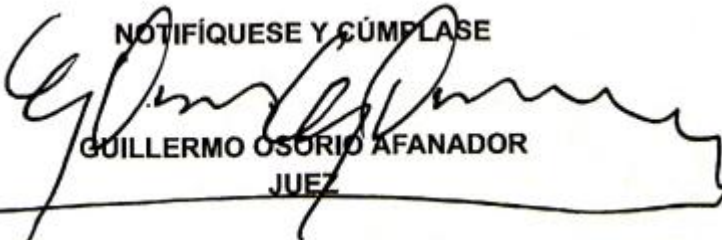


Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

PRIMERO: DECLARESE la falta de competencia por jurisdicción, para tramitar el presente asunto de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Considerar que la competencia para conocer del presente asunto la tiene el Juez Laboral del Circuito de Barranquilla.

TERCERO: Por Secretaría, **REMÍTASE** el expediente a la oficina judicial de Barranquilla, para que se someta a reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito de Barranquilla.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO
N° 141 DE HOY 18/12/2020 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA